



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

Medellín, agosto 3 2022

Radicado: 05088 31 05 002 2022 00211- 01
Accionante: HERNANDO GIRALDO
Accionado: JIMMY FERNANDO BOLAÑOS SÁNCHEZ
Asunto: PROCESO EJECUTIVO -MANDAMIENTO DE PAGO

La Sala Sexta de Decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir la providencia dentro del proceso ejecutivo laboral de la referencia, la que se expone en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

ANTECEDENTES

El accionante acude al trámite ejecutivo laboral pretendiendo se libre mandamiento de pago en contra del ejecutado por la suma de \$300'000.00 y sus intereses, suma que reclama como cumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales como abogado.

Como sustentación de sus súplicas expuso que fue contratado por el señor Bolaños Sánchez para que ejerciera su representación en un proceso judicial de declaración de unión marital de hecho, liquidación y disolución de sociedad

patrimonial, para lo cual se otorgó un poder, además que se suscribió un contrato de servicios profesionales.

Narró que, pese a presentarse la acción en febrero de 2020 esta fue inadmitida y luego rechazada, por lo que en septiembre de 2020 planteó al señor Bolaños Sánchez la posibilidad de presentar nuevamente la acción judicial, a lo que este contestó que no estaba seguro.

Que ante la dubitación expresó a su poderdante que podrían renunciar al poder, previo pago de honorarios o que él como abogado presentaría la acción como acreedor, al considerar que de no hacerlo se vería inmerso en una investigación disciplinaria por incumplimiento del mandato judicial.

Indicó que dentro del trámite de declaración de unión marital de hecho, de existencia de sociedad patrimonial y su liquidación se pretendía más de \$1'500.000.000 representados en bienes muebles e inmuebles.

Como pruebas adosó el mandato para la *“demanda de unión marital de hecho, y liquidación de sociedad patrimonial y posterior disolución de unión marital de hecho”*, el contrato de prestación de servicios profesionales de abogado y la providencia que da cuenta del trámite adelantado ante la jurisdicción de familia de radicado 05088-31-10-001-2019-01160.

En providencia del 24 de junio de 2022 se negó el mandamiento de pago tras advertir que el documento que se presenta como base de recaudo, esto es, el contrato de prestación de servicio no cumple con los presupuestos del artículo 100 del CPTSS, pues si bien se desprende del citado documento que el togado Hernando Giraldo se compromete a prestar asesoría en el área de derecho de familia, estableciendo como contraprestación el 30% de lo resultante de la liquidación de la sociedad patrimonial, solo se devela que la demanda fue

rechazada, lo que hace que lo debatido no supere el escenario de la incertidumbre e indeterminación siendo necesario agotar un trámite declarativo (archivo N° 2).

Inconforme con la decisión fue recurrida por la activa insistiendo en la procedencia de la ejecución. Expuso que no existe duda de la presentación de la acción judicial de declaración de unión marital, en tanto existe un auto inadmisorio, y respecto a la cuantía de los honorarios reclamados, se establecen de la misma demanda, cuyo monto superaba los \$985'670.000, de donde su 30% arroja la suma reclamada ejecutivamente como honorarios pactados, precisando que hubo un error en la demanda, en tanto allí se aludió a \$9'805.670.

ALEGATOS

Concedido el término de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, ninguna de las partes presentó escrito alguno.

CONSIDERACIONES

Atendiendo a los argumentos objeto de apelación, corresponde a esta corporación determinar la viabilidad de adelantar un trámite ejecutivo teniendo como documentos base de recaudo o título ejecutivo el contrato de prestación de servicios profesionales, así como las actuaciones surtidas dentro del trámite ante la jurisdicción de familia de radicado 05088-31-10-001-2019-01160-00.

Pues bien, al respecto resulta necesario detenerse en las premisas legales que ilustran este caso, a saber: el artículo 100 del CPTSS y del artículo 422 del Código General del Proceso.

El artículo 100 del CPTSS refiere que es exigible a través del trámite ejecutivo *“toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme”* a su turno, el artículo 422 del CGP indica como presupuestos de la

acción ejecutiva, la existencia de *“obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él...”*

Descripción que revela los elementos mínimos que debe contener aquel documento o acto que se presenta para cumplimiento a través del proceso ejecutivo laboral y que se sintetizan en tres aspectos primordiales a saber: 1) una obligación expresa, 2) clara y 3) actualmente exigible.

Se trata de requisitos que han de reunirse de forma conjunta y suficiente y a través de los cuales se decantan aquellos reclamos donde no se discute la existencia de una obligación, tampoco está en duda los sujetos obligado (s) y beneficiario (s), se tiene certeza en el monto adeudado y/o obligación debida, así como la fecha de exigibilidad. Reclamaciones donde es inane la discusión sobre la configuración de la obligación, pues tales elementos se establecieron con suficiencia en un documento que se presenta como base de recaudo.

Ahora bien, respecto a los requisitos expuestos, ilustrativa es la decisión de la Sala de Casación Civil de la CSJ del 24 de junio de 2021, donde se describió el contenido de los presupuestos del título valor, indicando que una **obligación es clara** cuando su contenido es inequívoco, no es oscuro y por tanto no es susceptible de interpretaciones disímiles. Define la **expresividad de la obligación** como la suficiencia de los términos en que se consigna sin que sea menester acudir a teorías o hipótesis, sino que es diáfana la manifestación del deudor en favor del acreedor. y en cuanto a la **exigibilidad**, consiste en la posibilidad de reclamar la satisfacción de la obligación dada la expiración del plazo o cumplimiento de la condición que mediaba para obtener su satisfacción. Así indicó la alta corporación:

“Los requisitos impuestos a los títulos ejecutivos, consignados en el artículo 422 del Código General del Proceso, relativos a tratarse de un documento proveniente del deudor o de su causante en donde conste una obligación clara, expresa y exigible, por supuesto se trasladan a los títulos valores y,

en esa medida, si el instrumento no satisface tales presupuestos, no puede seguir adelante el cobro coercitivo (...).

“(...) La claridad de la obligación, consiste en que el documento que la contenga sea inteligible, inequívoco y sin confusión en el contenido y alcance obligacional de manera que no sea oscuro con relación al crédito a favor del acreedor y la deuda respecto del deudor. Que los elementos de la obligación, sustancialmente se encuentren presentes: Los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico. Tanto el préstamo a favor del sujeto activo, así como la acreencia en contra y a cargo del sujeto pasivo (...).

“(...) La expresividad, como característica adicional, significa que la obligación debe ser explícita, no implícita ni presunta, salvo en la confesión presunta de las preguntas asertivas. No se trata de que no haya necesidad de realizar argumentaciones densas o rebuscadas para hallar la obligación, por cuanto lo meramente indicativo o implícito o tácito al repugnar con lo expreso no puede ser exigido ejecutivamente. Tampoco de suposiciones o de formulación de teorías o hipótesis para hallar el título. Y es exigible en cuanto la obligación es pura y simple o de plazo vencido o de condición cumplida (...)”¹.

Recientemente, sobre esa temática, la Corte adocrinó:

“(...) Tocante al carácter de la expresividad del documento adosado como báculo del compulsivo, la obligación que se pretende ejecutar con fundamento en su contenido incumple esa condición, pues no basta estar inserta por escrito o, derivarse de la confesión ficta, por cuanto debe obrar una manifestación del deudor, en favor del acreedor, de cumplir con un propósito preciso, puntual y, concreto, que no requiera de intrincadas elucubraciones sobre los pormenores del compromiso”.

“Aun cuando ello se puede lograr con varios documentos, es decir, el caso del título complejo, tal cuestión significa que, al articularlos, la obligación surja prístina; por tanto, si en conjunto, se requiere efectuar una interpretación más allá del tenor literal del contenido de la obligación de dar, hacer, no hacer o, de suscribir documentos, estará insatisfecho el requisito expreso del título”.

¹ CSJ. STC3298-2019 de 14 de marzo de 2019, exp. 25000-22-13-000-2019-00018-01.

“Se destaca, tal rasgo del título puede obtenerse de la confesión directa o ficta del deudor, siempre que ello surja de un interrogatorio de parte, cuyo fin sea insertar una obligación en un documento para demandar su cumplimiento, según lo permite el artículo 422 de la Ley 1564 de 20122, al remitir al canon 184 de la misma obra3”.

“Así, en definitiva, lo expreso implica que el documento revele, exponga y evidencie, la intención inequívoca de someter bajo su influjo al deudor de realizar una actividad positiva o negativa, en beneficio del acreedor”.

“No basta que la obligación sea vertida en un documento, pues el compromiso ejecutable apareja un ejercicio bien especificado que, en caso de incumplirse, el cartulario automáticamente sirva de soporte para materializarlo de manera inmediata, una vez verificado el incumplimiento”.

Por otra parte, atendiendo a los matices de esta discusión, pertinente es indicar que frente a la fijación de honorarios de los abogados, los artículos 2142, 2149 y 2159 del Código Civil definen el contrato de mandato como aquel en el que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, quien se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Contrato que por regla general se rige por el principio de libertad contractual. Por tanto, el pacto puede realizarse a través de cualquier medio ya sea escrito, verbal. Sin embargo, cuando sus términos se vierten expresamente por escrito, las partes quedan obligadas en los precisos términos acordados. (al respecto la sentencia SL 1813 de 2018)

Ahora bien, se trata de contrato que puede ser gratuito u oneroso; con una remuneración que puede pactarse como una suma cierta, ora como una suma determinable, en esta última categoría se halla el pacto de cuota litis, donde el

² “(...) Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. **La confesión** hecha en el curso de un proceso no **constituye título ejecutivo**, pero **sí** la que **conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184** (...)” (énfasis adrede).

³ “(...) Artículo 184. interrogatorio de parte. **quien pretenda demandar** o tema que se le **demande podrá pedir, por una sola vez, que su presunta contraparte conteste el interrogatorio que le formule sobre hechos que han de ser materia del proceso**. En la solicitud indicará concretamente lo que pretenda probar **y podrá anexar el cuestionario, sin perjuicio de que lo sustituya total o parcialmente en la audiencia** (...)” (se destaca).

derecho a percibir una remuneración por el mandato se ata al resultado favorable del litigio (al respecto la sentencia CSJ SL 2803 de 2020).

Con estas premisas se descende al **caso concreto**, donde en criterio del actor el contrato de prestación de servicio, complementado con la demanda que radicó para obtener la declaración de unión marital de hecho y liquidación de sus efectos patrimoniales, generan certeza de la existencia de una deuda en su favor, la que cuantifica en \$300'000.000 más intereses

Respecto al contrato de prestación de servicios, suscrito por el señor Jimmy Fernando Bolaños Sánchez con diligencia de presentación personal ante notario el 26 de agosto de 2019, se describen las siguientes pautas:

*“El contratista, en su calidad de abogado se compromete a brindar asesoría jurídica en el área de familia, pactando como remuneración **“el 30% de lo que resulte de la LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL constituida entre el demandante y demandado, señores JIMMY FERNANDO BOLAÑOS SÁNCHEZ Y JORGE HUMBERTO BERRIO GÓMEZ, valor que deberá ser cancelado en el momento en (que) le sea cancelado al señor JIMMY FERNANDO BOLAÑOS SÁNCHEZ por parte del demandando, señor JORGE HUMBERTO BERRIO GÓMEZ...”***

En adición se establece el incremento del porcentaje de honorarios en caso de presentarse recursos, se fija un término de duración del contrato (1 año a partir de la suscripción o la terminación del trámite judicial) se pactó el pago de una cláusula penal por incumplimiento del contrato, entre otras obligaciones.

Relativo al trámite de declaración de unión marital, reposa la providencia del 15 de enero de 2020 emanada del Juzgado 1° de Familia del Circuito de Bello, por la cual se inadmitió la demanda de unión marital de hecho, concediéndole un término de

5 días para adecuar las pretensiones y adosar algunos elementos de prueba. Trámite al que se le asignó el radicado 05088-31-10-001-2019-01160.

Ahora, como parte del recurso de apelación el recurrente transcribió el escrito que se elevó como demanda en el trámite ante la jurisdicción de familia, el que como pretensiones señala: declare la existencia de la unión marital de hecho, se disponga su disolución y acto seguido se liquide la sociedad patrimonial. En cuanto a la estimación de la cuantía refiere el escrito:

“Es usted competente, señor juez s usted competente, señor Juez, para conocer de este proceso, en razón a la naturaleza del mismo, por la vecindad de las partes, ubicación de los bienes y la cuantía, la cual se estima en la suma de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SERTENTA PESOS (\$9.805.670)”.

Monto que dice que corresponde a un error, pues la cuantía de las pretensiones era de \$985'670.000 (archivo N° 3 - recurso de apelación)

Son estas las pruebas adosadas al trámite de ejecución, con las que se concluye que no se reúnen los elementos básicos y mínimos de un título ejecutivo que pueda ser reclamado a través de la vía seleccionada por la activa.

Se destaca que, el contrato de prestación de servicios pese a establecer unos parámetros de fijación de la remuneración u honorarios con los cuales se retribuiría la gestión del profesional del derecho, este por sí solo, ni en conjunción con el auto que inadmitió la demanda permiten fijar de forma cierta si las obligaciones contratadas se cumplieron, como tampoco se tiene certeza del monto al que habría de aplicarse el porcentaje pactado.

Se destaca que el monto de la remuneración se pactó como cuota litis; esto es, el 30% de aquello que resultare en favor de Jimmy Fernando Bolaños con ocasión de la liquidación de sociedad patrimonial, esto es, aunque se tiene certeza del porcentaje (30%) el monto al cual se aplicaría es completamente aleatorio, sujeto

al debate y resultado de un proceso judicial, por tanto, el contrato por sí sólo no ofrece la certeza que reclama el título ejecutivo.

Certeza que no se obtiene al complementar el citado contrato con las actuaciones realizadas en el proceso ante la jurisdicción de familia, donde solo se demuestra que se presentó la demanda, pero esta no superó la etapa de revisión de requisitos formales del escrito y fue rechazada, por tanto no hubo una efectiva adjudicación de activos al señor Bolaños Sánchez que fuera susceptible de cuantificación para luego aplicarle un porcentaje que remunerara los servicios a Hernando Giraldo.

Como tampoco se extrae certidumbre de la obligación reclamada de la transcripción de la “demanda de declaración de existencia de unión marital de hecho y disolución de la misma” la que no tiene prueba de los bienes que componen el activo social, además que la estimación de la cuantía es por valor de \$9.805.670, sin que resulte suficiente la aclaración del monto, pues no es la parte quien con su declaración establece el valor de la obligación.

Así las cosas, encuentra la corporación que el contrato de prestación de servicios contiene la voluntad expresa de las partes para establecer sus obligaciones, que atendiendo a su tenor literal se desprende que el reconocimiento de los honorarios se cumple bajo las siguientes características: **a) Obedece a un aleas** en tanto el pago depende de la obtención de un lucro producto de la adjudicación de bienes en la liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, **b) no tiene excepciones**, no se establecieron condiciones o causales diferente a la obtención de un provecho para Jimmy Fernando Bolaños y **c) no se demuestra** que producto de la gestión de Hernando Giraldo se consiguiera la declaración y liquidación de la sociedad patrimonial del accionado y mucho menos se establece un valor real de lo adjudicado.

En síntesis, sin que satisfagan los presupuestos de constitución de un título ejecutivo improcedente es su reclamación por la vía elegida por el demandante, conclusión expuesta por la A quo y que se confirma en esta instancia.

Resta por indicar que no se generan costas, en tanto la acción se hallaba en la etapa de verificación de requisitos formales de la demanda y no había avanzado a la conformación del contradictorio, por tanto, no existe un sujeto resistente que se viera perjudicado por los actos de la accionante.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL, CONFIRMA** la providencia que por vía de apelación se revisa.

Sin costas dentro de esta instancia.

La presente providencia se notifica por estados

Se ordena la devolución del expediente al juzgado de origen para lo de su competencia

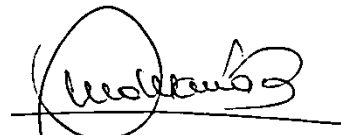
Los Magistrados,



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

CERTIFICO: Que la anterior providencia fue notificada en Estados publicados por medios digitales el 8 de agosto de 2022